

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO.

RECURSO DE REVISIÓN:

RR/092-20/CYDV Y SU

ACUMULADO RR/094-20/JOER.

REGISTRO INFOMEX:

RR00001020.

FOLIO DE LA SOLICITUD:

1

COMISIONADA PONENTE:

M.E. CINTIA YRAZU DE LA TORRE

VILLANUEVA.

RECURRENTE:

SUJETO OBLIGADO:

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

--- VISTOS. - Para resolver el expediente relativo al Recurso de Revisión previsto en el Capítulo I del Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, interpuesto en contra de actos atribuldos al Sujeto Obligado, PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se procede a dictar la presente Resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- Con fecha de inicio de trámite el día dieciséis de enero del año dos mil veinte, el hove recurrente presentó vía internet, a través del sistema electrónico INFOMEXQROO, solicitud de información ante el Sujeto Obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, la cual fue identificada con número de Folio INFOMEXQROO requiriendo textualmente lo siguiente:

"Solicito, atentamente la relación de todos y cada uno de los viajes que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete; así como las actas del Consejo de la Judicatura generadas durante el mismo periodo, solicitándole que anexe la documentación que sustente lo anterior." (Sic)

II.- En fecha treinta de enero de dos mil veinte, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, via internet, a través del sistema electrónico Infomex Quintana Roo, mediante oficio con número PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020, de misma fecha que la antes referida, dio respuesta en tiempo a la solicitud de información, manifestando fundamentalmente y de manera fiel lo siguiente:



En Infomexgroo:

"En atención a su solicitud de información Pública que realizó con fecha 16 de enero de 2020 mediante el sistema INFOMEXQROO con número de folio 📉 👍 medio le informamos que la información solicitada queda a su disposición para ser entregadas en la Unidad de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, mediante el número de oficio PJ-CJ-WTAIPDP-RS-020-2020, esto con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo."

En el oficio con número PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020, de fecha treinta de enero del año dos mil veinte:

PRESENTE.

En atención a la solicitud de información de fecha 16 de enero de 2020 y con número 5 del sistema INFOMEXQROO, mediante el cual requirió información relativa a: ... Se le informa al ciudadano que de conformidad con los previsto en los artículos 3, 52, 53, 54 fracción II y XV y 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se procede a dar respuesta a su solicitud de información pública en los términos siguientes:

En respuesta a su solicitud se adjunta la siguiente información:

En relación al punto 1.- Solicito, atentamente, la relación de todos y cada uno de los viajes que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete:

Le informamos que la información solicitada quedo a su disposición para ser entregada en la Unidad de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, mediante el número de oficio PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020, de fecha 30 de enero de 2020; debido a que por fallas del escáner nos fue imposible generar el archivo para subir al sistema INFOMEXQROO, esto con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Adjunto al presente oficio 23 fojas, con el contenido de los viajes que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete.

En relación al punto 2.- las actas del Consejo de la Judicatura generadas durante el mismo periodo (mayo y junio de dos mil diecisiete), solicitándole que anexe la documentación que sustente lo anterior.

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, clasificó la información como reservada, en razón que se hace de conocimiento que en términos del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y del 10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, las Sesiones del Consejo de la Judicatura son privadas y en vía de consecuencia, también lo son sus actas, por lo que el otorgamiento de la información planteada implicaría trastocar el régimen de facultades legales de este Cylerpo Colegiado, a fin de otorgar documentos que, como se vio por su propia y éspecial naturaleza se encuentra imposibilitado legalmente para proceder en los términos planteados por el solicitante, en efecto en términos del supuesto previsto en los artículos 113 fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual refiere que como información reservada podrá clasificarse la que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales y 134 fracción XII

EXT-7/CT/27/10/21.01

RESULTANDOS

PRIMERO. - El día veinte de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEXQROO, la parte solicitante hoy recurrente, interpuso Recurso de Revisión en contra de la respuesta dada por parte del Sujeto Obligado a su requerimiento de Información, señalando esencialmente y de manera literal lo siguiente:

"Descripción de sus hechos y agravios: Interpongo recurso de revisión por la negación de la Información solicitada al ente obligado, toda vez que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, clasificó la información como reservada, para mayor abundamiento anexo escrito y constancias." (Sic)

Aunado a lo anterior, el recurrente interpuso, mediante un escrito constante de dos fojas útiles, tamaño carta, impreso a doble cara, un segundo recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, el cual fue recibido el día veinte de febrero del año dos mil veinte y posteriormente enviado a este Instituto, mediante oficio con número **PJ-CJ-UTAIPDP-014-2020**, de fecha veintiuno del mismo mes y año antes citado. Por lo anterior, el referido medio de impugnación interpuesto por el hoy recurrente señala a la letra lo siguiente:

"Por este medio, interpongo el recurso de revisión, en virtud de que el sujeto obligado se negó a dar respuesta a la solicitud que en tiempo le fue realizada por el suscrito, respecto a lo siguiente:

No omito manifestarle, que si bien es cierto, me proporcionó la información relativa a los viajes que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete; también es cierto por cuanto a la información solicitada respecto a las actas del Consejo de la Judicatura generadas durante el mismo período (mayo y junio de dos mil diecisiete), no recibí una respuesta satisfactoria por parte del sujeto obligado, toda vez que me señaló a la literalidad, lo siguiente:

"El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, clasificó la información como reservada en razón que se hace del conocimiento que en términos del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y del 10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, las Sesiones del Consejo de la Judicatura son privadas y en vía de consecuencia, también lo son las actas, por lo que el otorgamiento de la información planteada implicaría trastocar el régimen de facultades legales de este Cuerpo Colegiado, a fin de otorgar documentos que, como se vio por su propia y espacial naturaleza se encuentra imposibilitado legalmente para proceder en los términos planteados por el solicitante, en efecto en términos del supuesto previsto en los artículos 113 fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual refiere que como información reservada podrá clasificarse la que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales y 134 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo".

Cabe precisarle a Usted, que el motivo del presente recurso, se basa en el hecho de la información requerida que me fue negada por el sujeto obligado, sin justificar o motivar las razones por las cuales clasifica como reservada la información pública solicitada.

Tomando en consideración el contenido a su respuesta que realizó al que suscribe, se advierte que señala que la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, sin mencionar el fundamento y motivación que llevó a realizar tal determinación y mucho menos

Página 3 de 26







manifiesta la fecha de la sesión del cuerpo colegiado mejor conocido como Comité de Transparencia, en la cual se haya realizado la clasificación que refirió; tampoco expuso las azones fundadas y motivadas para llegar al hecho de clasificar como reservada la información que solicité, siendo que el sujeto obligado es un ente público, que utiliza recursos públicos y las sesiones del Consejo de la Judicatura, entre sus postulados está el de lograr una mayor eficiencia institucional, que se traduzca en resultados visibles para la ciudadanía, y que sean acordes con los legítimos requerimientos de un Poder de Justicia más humano, moderno y cercano a la sociedad.

Ahora bien, de los artículos en los que basa su negativa a brindar la información, artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado señala lo siguiente:

"Las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo de la Judicatura serán privadas, en los días y horas que el mismo determine mediante acuerdos generales.

El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado podrá sesionar de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus integrantes. Dicha solicitud deberá presentarse al Presidente del propio Consejo a fin de que emita la convocatoria correspondiente".

Asimismo, el artículo 10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, señala:

"Las sesiones del Pleno serán privadas, de conformidad con el artículo 93 de la Ley. El Pleno sesionará en forma ordinaria y extraordinaria".

Por lo que, como se puede observar de los artículos antes citados, se me niega la información aduciendo que las sesiones del Pleno son privadas, pero no me hace referencia de las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que mi solicitud se ajusta al supuesto de la clasificación referida como "reservada", tal como lo establece el Título Sexto, en sus capítulos I y II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PRUEBAS:

- 1.- Acuse de recibo de Solicitud de información.
- 2.- Notificación de Respuesta de información Vía Infomex
- 3.- Notificación sin fecha del sujeto obligado.
- 4.- Oficio PJ-CJ-UTAIPDR-RS-020-2020, firmado por el Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado.
- 5.- Captura de pantalla del seguimiento del historial del folio

6

..." (Sic)

SEGUNDO. - Con fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, se dio debida cuenta del escrito de interposición al Comisionado Presidente del Instituto, correspondiéndole el número **RR/092-20** al Recurso de Revisión, mismo que por cuestión de turno recayó a la Comisionada Ponente, M.E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, por lo que en esa misma fecha se acordó asignarle el Recurso de mérito para efectos de lo establecido en el artículo 176 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Lo anterior, con relación al recurso de revisión interpuesto vía Infomex, en fecha veinte de febrero del año dos mil veinte.

Con fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, se dio debida cuenta del escrito de interposición al Comisionado Presidente del Instituto, correspondiéndole el número **RR/094-20** al Recurso de Revisión, mismo que por cuestión de turno recayó al Comisionado Ponente, Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez, por lo que en esa misma fecha se acordó asignarle el Recurso de mérito para efectos de lo establecido en el artículo 176 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de



Quintana Roo. Lo anterior, con relación al recurso de revisión interpuesto ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado recurrido, recibido en fecha veinte de febrero del año dos mil veinte y turnado al día siguiente a este Instituto.

TERCERO. - Mediante acuerdo de fecha siete de octubre del año dos mil veinte, se admitieron los Recursos a trámite, ordenándose emplazar a la autoridad responsable en términos de lo establecido en los artículos 56 y 176, fracción I, ambos de la Ley de la materia. Cabe señalar que en el referido acuerdo, la Comisionada Ponente determino acumular el recurso RR/094-20/JOER al diverso RR/092-20/CYDV, en virtud de lo siguiente:

"Ahora bien, toda vez que de los expedientes en trámite que se substancian por este Instituto, además del presente indicado al rubro superior derecho, se tiene registrado por razón de turno el número RR/094-20/JOER, mismo Recurso que fuera presentado ante este Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, el cual fuera turnado por la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado recurrido, interpuesto por el C..., en contra de la respuesta dada a su solicitud de información con idéntico folio número , mediante oficio PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020, de fecha treinta de enero del año en curso, documento firmado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Poder recurrido; en consecuencia a los documentos que se han descrito en el proemio de este acuerdo y que han sido debidamente analizados, la Comisionada Ponente determina que nos encontramos ante una duplicidad de Recursos, respecto de una misma solicitud de : máxime que el Recurrente, el C..., así como información, es decir, el folio 8 el Sujeto Obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, son lo mismos en ambos casos; por lo que, con fundamento en lo establecido en el artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se ordena la ACUMULACIÓN del Recurso de Revisión RR/094-20/JOER al diverso RR/092-20/CYDV los que se considerarán como el mismo y uno solo, sujetándose como único asunto a la decisión que emita este Instituto y que resuelva en definitiva; en consecuencia, remítanse los documentos que integran el expediente del Recurso de Revisión RR/094-20/JOER al RR/092-20/CYDV; de igual forma, se ordena **DAR VISTA** al Recurrente para que dentro del término de CINCO HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, se tiene por autorizado el correo electrónico que señaló la parte recurrente para efectos de oír y recibir notificaciones a su favor."

CUARTO. - El día veintidós de octubre del año dos mil veinte, se notificó a través del sistema electrónico INFOMEXQROO, al Sujeto Obligado recurrido, la admisión del Recurso de Revisión interpuesto en su contra, emplazándolo para que dentro del término de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación produjera su contestación y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

QUINTO. - El día tres de noviembre del año dos mil veinte, se tuvo por recepcionado por la Comisionada Ponente, mediante oficio **PJ-CJ-UTAIPDP-RR-004-2020**, de misma fecha antes referida, la Contestación al Recurso de Revisión al rubro indicado, firmado por el Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, presentado en fecha tres de noviembre del año dos mil veinte, en el **INFOMEXQROO**, según el historial de registro de ese sistema electrónico, en el paso: "Recibe respuesta del recurso" y fecha de registro. Misma contestación fue presentada vía correo electrónico y en la fecha que se envió en el sistema electrónico ya mencionado. Por lo anterior, el Sujeto Obligado manifestó sustancialmente lo siguiente:



∛IMPROCEDENCIA DEL RECURSO

Se estima que ese Órgano Garante deberá de considerar improcedente el Recurso de Revisión que nos ocupa en términos de lo previsto en el artículo 183 fracción III en relación con el contenido del similar 170 fracción II, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, ya que evidentemente, del propio escrito mediante el cual se formulan las pretensiones que dieron lugar al asunto que nos ocupa, puede observarse que la persona que se indica como agraviado <u>es diverso o distinto</u> del solicitante inicial, ya que en la página final del escrito en referencia, se estampa el nombre LIC. ..., como promovente de los agravios, quien es persona distinta de ..., el cual es el titular del derecho que fue ejercido de manera primordial a través de la solicitud de acceso a la información registrada con el número de folio sin que del contenido del mencionado escrito de agravios se encuentre señalada la autorización o representación hacia persona distinta del solicitante y que le conceda tal garantía para actuar en su nombre y representación, por ende, se incumple abiertamente con lo requerido en la fracción II del artículo 170 de la Ley Estatal vigente en la materia y ante ese contexto, es fehaciente la falta de un elemento de contenido y procedencia requeridos por la Ley para promover el Recurso de Revisión; por lo que se actualiza lo previsto en el artículo 184 fracción IV, que a la letra señala:

Artículo 184. El Recurso de Revisión será sobreseído todo o en parte, mediante acuerdo que dicte el Comisionado Ponente, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.

Siendo necesario aclarar que, en el caso que nos ocupa, recae la necesidad de sobreseer en su totalidad el presente Recurso de Revisión, ya que se encuentra viciado de origen al no contener agravios señalados por el mismo solicitante de la información ni por persona legalmente autorizada para realizarlos en su nombre y representación.

Señalado lo anterior y bajo la perspectiva de únicamente abundar en apego a derecho y precaución, se realizan las siguientes manifestaciones:

AD CAUTELAM

Inicialmente, debe hacerse notar a ese Honorable Instituto que el Sujeto Obligado Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en ningún momento vulneró o limitó el ejercicio del derecho de acceso a la información del presunto recurrente, ya que le fue otorgada una respuesta oportuna a su solicitud, en la cual se le concedió contestación acerca de la información de su interés dentro del plazo que la Ley de la materia vigente en el Estado señala para ello y atendiendo en todo momento las previsiones normativas aplicables al caso particular.

Esto es así, ya que como obra del Acuse de Notificación de Respuesta emitido por el Sistema Informex en fecha 30 de enero de dos mil veinte, se comunicó al solicitante que la información de su interés quedó a su disposición para ser entregada en la Unidad de Yransparencia del Poder Judicial del Estado, misma que se le proporcionó a través del oficio PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020 al que le fueron anexadas toda la documentación relativa a los viajes que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete.

Por otra parte, cabe destacar que de ninguna forma se violentó precepto legal alguno en agravio del solicitante, ya que se cumplió cabalmente con informarle que este Sujeto Obligado se encuentra impedido legalmente para otorgarle copias de las actas del Consejo de la Judicatura generadas durante los meses de mayo y junio del dos mil diecisiete, ya que como se desprende del texto del oficio PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020 mediante el cual,

Página 6 de 26

el entonces Titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, le dio certera respuesta en la que plasmó que el Consejo de la Judicatura determinó que, de acuerdo a lo previsto al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y del 10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del propio Poder Judicial, las sesiones del mencionado Consejo son privadas y en consecuencia, también lo son sus actas, por lo que otorgar copias de las mismas implicaría vulnerar un precepto legal que atiende al régimen de facultades del cuerpo colegiado que integra el Consejo de la Judicatura, sin dejar de lado que la propia Ley de la materia prevé de manera expresa que se considerará reservada toda aquella información que por disposición de una ley tenga tal carácter, por lo que en todo sentido, este Sujeto Obligado atendió de manera exacta lo previsto en la normatividad, fundando y motivando la razón de su respuesta, lo que demuestra que los supuestos agravios vertidos en el escrito de interposición del presente medio de impugnación son del todo improcedentes.

Resulta de este modo, que carecen de fundamento las expresiones del quejoso, al indicar que no se le mencionó el fundamento y motivación que llevó a realizar la determinación plasmada en la respuesta, objetando que el Poder Judicial no le informó en que basó su negativa a brindar la información, lo cual es equivocado, pues del contenido de la propia respuesta es posible leer que se le exteriorizaron las previsiones normativas que dieron lugar a la imposibilidad de brindarle la información, señalándole que se encuentran en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en el similar 10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del propio Poder Judicial.

Por otro lado, también resulta errado que el quejoso señale que existió una negativa del otorgamiento de la información debido a una clasificación, sin que se le señalara la fechal de sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, ya que la razón por la cual no pudo proporcionarse la información de interés al solicitante versa en un impedimento legal para el sujeto obligado y no en una clasificación objetiva de la información, ya que como bien se le señaló, existe una normatividad que prevé expresamente el carácter y la naturaleza jurídica de la información que requirió.

Bajo estas consideraciones de derecho, se hace evidente que los supuestos agravios del ahora recurrente devienen de infundados, ya que el actuar de este Poder Judicial en el asunto que nos ocupa, específicamente en la aplicación de criterios e interpretación en materia de acceso a la Información Pública, fue en todo tiempo apegado a derecho.

..." (Sic)

SEXTO. - El día veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, con fundamento en lo previsto por la fracción V del artículo 176 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se emitió el correspondiente Acuerdo para la celebración de la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y la Presentación de Alegatos de las Partes, señalándose las doce horas del día cuatro de diciembre del año dos mil veinte.

SÉPTIMO. - El día cuatro de diciembre del año dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en la fracción VI del artículo 176 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se llevó a cabo, en el domicilio oficial de este Instituto, la celebración de la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Presentación de Alegatos por las Partes, misma que consta en autos del Recurso de Revisión **RR/092-20/CYDV Y SU ACUMULADO RR/094-20/JOER**, en que se actúa.

Cabe señalar que se desahogaron por su propia y especial naturaleza, las documentales presentadas por las partes, una vez que fueron admitidas.

De igual forma, en la referida audiencia quedó asentado que las partes del presente medio de impugnación no formularon alegatos por escrito.



OCTAVO. - En fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, de conformidad con el artículo 172, párrafo primero de la Ley de la materia, se dictó acuerdo de ampliación del plazo para emitir la resolución en el expediente RR/092-20/CYDV Y SU ACUMULADO RR/094-20/JOER.

En tal virtud y en atención a los Acuerdos emitidos por el Pleno de este Instituto, con los ACT/PLENO/EXT/08/04/20-01; ACT/PLENO/EXT/20/03/20-01; ACT/PLENO/22/04/20; ACT/PLENO/EXT/29/05/20; ACT/PLENO/EXT/03/06/20; ACT/PLENO/EXT/31/07/20; ACT/PLENO/EXT/30/06/20; ACT/PLENO/13/08/20; ACT/PLENO/11/09/2020 y ACT/PLENO/EXT/28/08/2020; ACT/PLENO/02/10/2020, mediante los cuales se determinó la suspensión de plazos y términos, desde el día veintitrés de marzo hasta el día dieciséis de octubre del año dos mil veinte; a los Acuerdos: ACT/EXT/PLENO/16/12/2020 y ACT/EXT/PLENO/18/01/2021 mediante los cuales se determinó la suspensión de plazos y términos, desde el día dieciséis de diciembre del año dos mil veinte hasta el día quince de febrero del año dos mil veintiuno; acuerdo ACT/EXT/PLENO/17/02/2021, mediante el cual se determinó la suspensión de plazos y términos, desde el día diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno hasta el día quince de marzo del año dos mil veintiuno; acuerdos ACT/EXT/PLENO/17/03/2021, ACT/EXT/PLENO/16/04/2021 y ACT/EXT/PLENO/23/04/2021, mediante los cuales se determinó la suspensión de plazos y términos, desde el día dieciocho de marzo del año dos mil veintiuno hasta el día catorce de mayo del año dos mil veintiuno y ACT/EXT/PLENO/18/05/2021, mediante el cual se determinó la suspensión de plazos y términos del diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno al quince de junio del presente año, por causas de fuerza mayor debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). No obstante, mediante acuerdo ACT/EXT/PLENO/16/06/2021, el Pleno de este Instituto determinó dejar sin efectos a partir del veintiuno de junio del año en curso, la suspensión de los términos y plazos para la tramitación y sustanciación de los recursos de revisión; en consecuencia, se procede a emitir la presente resolución de acuerdo a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - El Pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, 25, 29 fracción III, 30, 33 y demás relativos aplicables, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. - Del análisis de los escritos, actuaciones y constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como del estudio de las documentales admitidas y desahogadas, que en su oportunidad fueron presentadas por las partes, se observa lo siguiente:

La parte hoy recurrente, en **su solicitud de acceso a la información** requirió del Sujeto Obligado:

"Solicito, atentamente la relación de todos y cada uno de los viajes que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete; así como las actas del Consejo de la Judicatura generadas durante el mismo periodo, solicitándole que anexe la documentación que sustente lo anterior." (Sic)

II.- En fecha treinta de enero de dos mil veinte, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, via internet, a través del sistema electrónico Infomex Quintana Roo, mediante oficio con número PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020, de misma fecha que la antes referida, dio respuesta en tiempo a la solicitud de información, manifestando fundamentalmente y de manera fiel lo siguiente:

En Infomexqroo:

"En atención a su solicitud de información Pública que realizó con fecha 16 de enero de 2020 mediante el sistema INFOMEXQROO con número de folio no por este medio le informamos que la información solicitada queda a su disposición para ser entregadas en la Unidad de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, mediante el número de oficio PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020, esto con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo." (Sic)

En el oficio con número **PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020,** de fecha treinta de enero del año dos mil veinte:

PRESENTE.

En atención a la solicitud de información de fecha 16 de enero de 2020 y con número de folio del sistema INFOMEXQROO, mediante el cual requirió información relativa a: ... Se le informa al ciudadano que de conformidad con los previstó en los artículos 3, 52, 53, 54 fracción II y XV y 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se procede a dar respuesta a su solicitud de información pública en los términos siguientes:

En respuesta a su solicitud se adjunta la siguiente información:

En relación al punto 1.- Solicito, atentamente, la relación de todos y cada uno de los viajes que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete:

Le informamos que la información solicitada quedo a su disposición para ser entregada en la Unidad de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, mediante el número de oficio PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020, de fecha 30 de enero de 2020; debido a que por fallas del escáner nos fue imposible generar el archivo para subir al sistema INFOMEXQROO, esto con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Adjunto al presente oficio 23 fojas, con el contenido de los viajes que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete.

En relación al punto 2.- las actas del Consejo de la Judicatura generadas durante el mismo periodo (mayo y junio de dos mil diecisiete), solicitándole que anexe la documentación que sustente lo anterior.

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, clasificó la información como reservada, en razón que se hace de conocimiento que en términos del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y del 10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, las Sesiones del Consejo de la Judicatura son privadas y en vía de consecuencia, también lo son sus actas, por lo que el otorgamiento de la información planteada implicaría trastocar el régimen de facultades legales de este



Cuerpo Colegiado, a fin de otorgar documentos que, como se vio por su propia y especial naturaleza se encuentra imposibilitado legalmente para proceder en los términos planteados por el solicitante, en efecto en términos del supuesto previsto en los artículos 113 fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual refiere que como información reservada podrá clasificarse la que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales y 134 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo..." (Sic)

III.- Inconforme con la respuesta dada a su solicitud de información, **la parte recurrente** presentó Recurso de Revisión cuyo contenido ha quedado descrito de manera esencial, en el **RESULTANDO PRIMERO**, de la presente resolución, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra se insertare.

IV. Por su parte, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, en su escrito de contestación al Recurso manifestó, respecto de los hechos señalados por el recurrente, lo que se encuentra transcrito en lo principal, en el RESULTANDO QUINTO, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra se insertare.

TERCERO.- Referido lo anterior, en la presente Resolución este Instituto analiza la atención y respuesta dada a la solicitud de acceso a la información, acorde a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y demás disposiciones que resulten aplicables, con el objeto de garantizar que en los actos y resoluciones del Sujeto Obligado se respeten los principios de transparencia y acceso a la información, protección de los datos personales en su poder, y las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Para tal fin, este Órgano Colegiado considera necesario precisar que las Unidades de Transparencia se responsabilizan ante el solicitante de la atención dada a las solicitudes de información que se le requieren a los Sujetos Obligados.

Lo antes considerado, es en razón de lo consignado por la Ley de Transparencia y Asceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en el sentido de que: las Unidades de Transparencia serán los enlaces entre los Sujetos Obligados y el solicitante (artículo 64); los responsables de las Unidades de Transparencia serán designados por el Titular del Sujeto Obligado, de quién dependerá directamente (artículo 65); las Unidades de Transparencia tendrán la función de recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y darles seguimiento hasta la entrega de la misma, en la forma y modalidad que la haya pedido el interesado (artículo 66 fracción II); así como la de realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información (artículo 66 fracción IV), y efectuar las notificaciones a los solicitantes (artículo 66 fracción

Es de ponderarse también que de conformidad con lo que dispone el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, el derecho humano de acceso a la información pública será accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establecen en la propia ley.

En ese mismo contexto el numeral 8 de la Ley invocada, contempla que todos los integrantes de los sujetos obligados, así como el personal a su cargo, están obligados a respetar el ejercicio social del derecho humano de acceso a la información pública y para tal efecto deberán privilegiar el principio de máxima publicidad.

Los únicos límites al ejercicio de dicho derecho, que la Ley en comento prevén en sus numerales 134 y 137, es que la información sea considerada como reservada o confidencial.

Por lo anterior, es necesario retomar el contenido y alcance de la solicitud de información hecha por el ahora Recurrente, siendo el siguiente:

"Solicito, atentamente la **relación de todos y cada uno de los viajes que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete**; así como las **actas del Consejo de la Judicatura generadas durante el mismo periodo**, solicitándole que anexe la documentación que sustente lo anterior." (Sic)

Nota: Lo resaltado es propio.

En este sentido, este órgano resolutor observa del contenido de la solicitud de cuenta los siguientes **rubros de información** que para mayor precisión los identifica con los siguientes incisos:

a) Relación de todos y cada uno de los <u>viajes</u> que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete;

b) Actas del Consejo de la Judicatura generadas durante el mismo periodo, solicitándole que anexe la documentación que sustente lo anterior.

En virtud de la solicitud de acceso a la información con número de folio de 12 de 12

Con relación al inciso a):

"... Le informamos que la información solicitada quedo a su disposición para ser entregada en la Unidad de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, mediante el número de oficio PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020, de fecha 30 de enero de 2020; debido a que por fallas del escáner nos fue imposible generar el archivo para subir al sistema INFOMEXQROO, esto con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Adjunto al presente oficio 23 fojas, con el contenido de los viajes que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete..."

En virtud de la respuesta emitida por el sujeto obligado recurrido, el recurrente mánifestó en su recurso de revisión lo siguiente:

"No omito manifestarle, que si bien es cierto, me proporcionó la información relativa a los viajes que se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete..."

Nota: Lo resaltado es propio.

A

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de interpretación con número **01/20** emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se detalla a continuación:

"Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis. Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.

Resoluciones:

RRA 4548/18. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 12 de septiembre de 2018. Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2018/&a=RRA%20 4548.pdf

RRA 5097/18. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de septiembre de 2018. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2018/&a=RRA%20 5097.pdf

RRA 14270/19. Registro Agrario Nacional. 22 de enero de 2020. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2019/&a=RRA%20 14270.pdf

Segunda Época

Criterio 01/20"

Luego entonces, el Pleno de este Instituto razona que de los dos rubros en que se compone la solicitud de información con número de folio , **el marcado** con el inciso a) antes detallado, esto es: "Relación de todos y cada uno de los viajes ĕque se realizaron en los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete...", fue Esatisfecho ya que el recurrente no manifestó inconformidad alguna, por lo que dicho rengión no será estudiado por este órgano garante, por no representar controversia alguna al respecto, siendo procedente el presente recurso de revisión en cuanto a la determinación de Reservada de la información por parte del Sujeto Obligado Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, según se desprende de la respuesta otorgada por la Unidad de Transparencia a la solicitud de información de cuenta, esto es en cuanto al rubro identificado como inciso b, es decir, "actas del Consejo de la Judicatura" durante el mismo periodo, solicitándole que anexe documentación que sustente lo anterior", en apego a lo previsto en el artículo 169 fracción I de la Ley en la materia, el cual se detalla a continuación:

"Artículo 169. El Recurso de Revisión procederá en contra de:

I. La clasificación de la información;

En virtud de lo antes referenciado, el Pleno del Órgano Garante realiza las siguientes apreciaciones:

Él artículo 1° de la Constitución Federal, establece como fuente de reconocimiento de derechos humanos a la misma carta magna y a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; además, prevé la obligación de todas las autoridades, en el ámbito sus competencias, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, adoptando siempre la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce como principio *pro persona*.

Página 12 de 26

De esta manera, el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en nuestra carta magna que, en la parte que interesa (artículo 6, inciso A), fracción III), establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Mismos principios y bases que recoge nuestra Constitución política estatal en su artículo 21.

Asimismo, el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, establece que toda información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberá habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley general y las demás normas aplicables.

"Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General y las demás normas aplicables."

Por su parte el artículo 18 de la Ley de la materia establece la obligación que tienen los Sujetos Obligados de documentar y conservar en sus archivos todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, a fin de satisfacer adecuadamente el derecho humano de acceso a la información pública gubernamental.

"Artículo 18. Los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados."

Igualmente, en términos del artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los **Poderes** Ejecutivo, Legislativo y **Judicial**, municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado, son **sujetos obligados** a transparentar y **permitir el acceso a su información** y proteger los datos personales que obren en su poder.

Artículo 52. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado.

Aunado a ello, el artículo 151 de la antes referida normativa establece que, los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

Artículo 151. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

A

Página 13 de 26

La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante, cuando sea materialmente imposible.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.

En cuanto a la improcedencia del recurso.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos emitidos por la parte recurrida, respecto a la improcedencia del recurso de revisión, en virtud de que: "Se estima que ese Órgano Garante deberá de considerar improcedente el Recurso de Revisión que nos ocupa en términos de lo previsto en el artículo 183 fracción III en relación con el contenido del similar 170 fracción II, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, ya que evidentemente, del propio escrito mediante el cual se formulan las pretensiones que dieron lugar al asunto que nos ocupa, puede observarse que la persona que se indica como agraviado es diverso o distinto del solicitante inicial, ya que en la página final del escrito en referencia, se estampa el nombre LIC. ..., como promovente de los agravios, quien es persona distinta de ..., el cual es el titular del derecho que fue ejercido de manera primordial a través de la solicitud de acceso a la información registrada con el número de folio sin que del contenido del mencionado escrito de agravios se encuentre señalada la autorización o representación hacia persona distinta del solicitante y que le conceda tal garantía para actuar en su nombre y representación, por ende, se incumple abiertamente con lo requerido en la fracción II del artículo 170 de la Ley Estatal vigente en la materia y ante ese contexto, es fehaciente la falta de un elemento de contenido y procedencia requeridos por la Ley para promover el Recurso de Revisión; por lo que se actualiza lo previsto en el artículo 184 fracción IV...", este Instituto tiene a bien a analizar lo siguiente contenido en la Ley de Transparencia estatal:

Artículo 170. El recurso de revisión deberá contener:

- I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
- II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;
- III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso, de no existir respuesta el número de folio de la solicitud;
- IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
- V. El acto que se recurre;
- VI. Las razones o motivos de inconformidad, y
- VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso de falta de respuesta de la solicitud.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.

Artículo 171. El Recurso de Revisión podrá presentarse a través de los siguientes medios y modalidades;

I Por escrito:

a) Libre o en el formato que corresponda, presentado de manera directa y personal en la oficina u oficinas de la Unidad de Transparencia, designadas para ello;

II. Por medios electrónicos:

a) A través de la Plataforma Nacional, por medio de su Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, de conformidad con el artículo 50 fracción II de la Ley General, o

Página 14 de 26

Artículo 172. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca esta ley, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un período de veinte días.

Purante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor de recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.

Artículo 177. Cuando se presenten, por la misma o diferente vía, dos Recursos de Revisión con idéntico número de folio de respuesta de la solicitud de acceso, se trate de la misma persona del recurrente e igual sujeto obligado; de tal manera que se advierta una duplicidad del medio de impugnación que se intenta, el Comisionado Ponente, que haya recibido del segundo de ellos, procederá a emitir un acuerdo ordenando su acumulación y remisión al primero de éstos, los que se considerarán como el mismo y uno solo, sujetándose como único asunto a la decisión que emita el Instituto y que resuelva en definitiva. De dicho acuerdo de acumulación deberá darse vista a la parte recurrente a más tardar dentro de los tres días siquientes a su emisión.

Por lo anterior y del análisis realizado en el acuerdo de fecha siete de octubre del año dos mil veinte, el cual obra en los autos del expediente en el que se actúa y transcrito en el Resultando Tercero de la presente resolución, la Comisionada Ponente llegó a la conclusión de que los recursos de revisión interpuestos, es decir, el RR/092-20/CYDY y RR/094-20/JOER por el hoy recurrente, si bien fueron presentados por diferentes medios y modalidades (uno por el sistema electrónico Infomex y otro ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, respectivamente) se trata de una duplicidad, al referirse al mismo folio por la mismo nombre del solicitante de la información y al mismo nombre del recurrente al observándose en la parte superior derecha del escrito del medio de impugnación presentado de manera física, ante el Sujeto Obligado, el nombre del RECURRENTE, quien resulta ser el mismo que interpone el recurso vía Infomex, con la consideración de que si bien en la foja dos del mismo documento aparece un nombre distinto, el mismo carece de rúbrica.

Por lo tanto, bajo el principio de suplencia de la queja, contenido en el artículo 172 párrafo segundo de la Ley en la materia, y siendo en ningún caso es necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto, este Órgano Garante determina que resultan improcedentes los argumentos planteados por la parte recurrida al invocar causal de improcedencia contenida en el artículo 183 fracción III con relación al artículo 170 fracción II, ambos del ordenamiento jurídico antes mencionado.

En tal virtud, este Instituto analiza la **respuesta otorgada por el Sujeto Obligado a la solicitud** con número folio **INFOMEXQROO** misma que obra en el propio sistema electrónico, en lo que se refiere al **rubro de información marcado con el inciso b)**, el cual, en esencia es el siguiente:

En el oficio con número **PJ-CJ-UTAIPDP-RS-020-2020**, de fecha treinta de enero del año dos mil veinte:

... PRESENTE.

A.

En relación al punto 2.- las actas del Consejo de la Judicatura generadas durante el mismo periodo (mayo y junio de dos mil diecisiete), solicitándole que anexe la documentación que sustente lo anterior.

Él Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, clasificó la información como reservada, en razón que se hace de conocimiento que en términos del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y del 10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, las Sesiones del Consejo de la Judicatura son privadas y en vía de consecuencia, también lo son sus actas, por lo que el otorgamiento de la información planteada implicaría trastocar el régimen de facultades legales de este Cuerpo Colegiado, a fin de otorgar documentos que, como se vio por su propia y especial naturaleza se encuentra imposibilitado legalmente para proceder en los términos planteados por el solicitante, en efecto en términos del supuesto previsto en los artículos 113 fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual refiere que como información reservada podrá clasificarse la que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales y 134 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo..." (Sic)

Nota: Lo resaltado es propio.

Ahora bien, derivado de la respuesta primigenia y con relación al rubro de información marcado como inciso b, el recurrente al interponer el medio de impugnación que se resuelve señaló de manera esencial lo siguiente:

... por cuanto a la información solicitada respecto a las actas del Consejo de la Judicatura generadas durante el mismo período (mayo y junio de dos mil diecisiete), no recibí una respuesta satisfactoria por parte del sujeto obligado, toda vez que me señaló a la literalidad, lo siguiente:

Cabe precisarle a Usted, que el motivo del presente recurso, se basa en el hecho de la información requerida que me fue negada por el sujeto obligado, sin justificar o motivar las razones por las cuales clasifica como reservada la información pública solicitada.

Tomando en consideración el contenido a su respuesta que realizó al que suscribe, se advierte que señala que la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, sin mencionar el fundamento y motivación que llevó a realizar tal determinación y mucho menos manifiesta la fecha de la sesión del cuerpo colegiado mejor conocido como Comité de Transparencia, en la cual se haya realizado la clasificación que refirió; tampoco expuso las razones fundadas y motivadas para llegar al hecho de clasificar como reservada la información que solicité, siendo que el sujeto obligado es un ente público, que utiliza recursos públicos y las sesiones del Consejo de la Judicatura, entre sus postulados está el de lograr una mayor eficiencia institucional, que se traduzca en resultados visibles para la ciudadanía, y que sean acordes con los legítimos requerimientos de un Poder de Justicia más humano, moderno y cercano a la sociedad.

Ahora bien, de los artículos en los que basa su negativa a brindar la información, artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado señala lo siguiente:

"Las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo de la Judicatura serán privadas, en los días y horas que el mismo determine mediante acuerdos generales.

El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado podrá sesionar de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus integrantes. Dicha solicitud deberá Página 16 de 26

1

presentarse al Presidente del propio Consejo a fin de que emita la convocatoria correspondiente".

Asimismo, el artículo 10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, señala:

"Las sesiones del Pleno serán privadas, de conformidad con el artículo 93 de la Ley. Et Pleno sesionará en forma ordinaria y extraordinaria".

Por lo que, como se puede observar de los artículos antes citados, se me niega la información aduciendo que las sesiones del Pleno son privadas, pero no me hace referencia de las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que mi solicitud se ajusta al supuesto de la clasificación referida como "reservada", tal como lo establece el Título Sexto, en sus capítulos I y II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública..." (Sic)

Nota: Lo resaltado es propio.

Aunado a lo anterior, al dar contestación al presente medio de impugnación, el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo manifestó, en cuanto a lo antes mencionado, lo siguiente:

AD CAUTELAM

Por otra parte, cabe destacar que de ninguna forma se violentó precepto legal alguno en, agravio del solicitante, ya que se cumplió cabalmente con informarle que esté Sujeto Obligado se encuentra impedido legalmente para otorgarle copias de las actas del Consejo de la Judicatura generadas durante los meses de mayo y junio del dos mil diecisiete, ya que como se desprende del texto del oficio PJ-UTAIPDP-RS-020-2020 mediante el cual, el entonces Titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, le dio certera respuesta en la que plasmó que el Consejo de la Judicatura determinó que, de acuerdo a lo previsto al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y del 10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del propio Poder Judicial, las sesiones del mencionado Consejo <u>son privadas y en consecuencia, también lo son sus actas,</u> por lo que otorgar copias de las mismas implicaría vulnerar un precepto legal que atiende al régimen de facultades del cuerpo colegiado que integra el Consejo de la Judicatura, ein dejar de lado que la propia Ley de la materia prevé de manera expresa que se considerará reservada toda aquella información que por disposición de una ley tenga tal carácter, por lo que en todo sentido, este Sujeto Obligado atendió de manera exacta lo previsto en la normatividad, fundando y motivando la razón de su respuesta, lo que demuestra que los supuestos agravios vertidos en el escrito de interposición del presente medio de impugnación son del todo improcedentes.

Resulta de este modo, que carecen de fundamento las expresiones del quejoso, al indicar que no se le mencionó el fundamento y motivación que llevó a realizar la determinación plasmada en la respuesta, objetando que el Poder Judicial no le informó en que basó su negativa a brindar la información, lo cual es equivocado, pues del contenido de la propia respuesta es posible leer que se le exteriorizaron las previsiones normativas que dieron lugar a la imposibilidad de brindarle la información, señalándole que se encuentran en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en el similar 10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del propio Poder Judicial.

Por otro lado, también resulta errado que el quejoso señale que existió una negativa del otorgamiento de la información debido a una clasificación, sin que se le señalara la fecha de sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, ya que la razón por la cual no pudo proporcionarse la información de interés al solicitante versa en un impedimento legal para el sujeto obligado y no en una clasificación objetiva de la información, ya que como bien se le señaló, existe





una normatividad que prevé expresamente el carácter y la naturaleza jurídica de la información que requirió.

..." (Sic)

Nota: Lo resaltado es propio.

Bajo el contexto anterior, es importante considerar lo que se establece en la Ley de Transparencia Local, en su artículo 121, el cual, define el concepto de clasificación y precisa que los titulares de las Áreas de los sujetos obligados son los responsables de clasificar la información de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la Ley estatal:

"Artículo 121. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

Los supuestos de reserva o confidencialidad deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y, en ningún caso, podrán contravenirla.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en esta Ley."

Por otra parte, el artículo 159 de la Ley en mención señala que el área correspondiente del Sujeto Obligado deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para confirmar, modificar o revocar dicha clasificación.

Artículo 159. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información deban ser clasificada, se sujetarán a lo siguiente:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

- I. Confirmar la clasificación;
- II. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, o
- III. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 154 de la presente Ley.

De la misma forma, los artículos 61, 62, fracción II y 122, de la Ley de la materia prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los suprestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión, debiendo señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Artículo 61. El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como

invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Artículo 62, Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes funciones:

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; (...)

Artículo 122. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 159. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información deban ser clasificada, se sujetarán a lo siguiente:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

- I. Confirmar la clasificación;
- II. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, o
- III. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 154 de la presente Ley.

En esta directriz, el artículo 125 de la multicitada Ley establece que para la aplicación de la **prueba de daño**, el sujeto obligado deberá justificar que: **I.** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público; **II.** El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y **III.** La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 125. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable / de perjuicio significativo al interés público;
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Página 19 de 26



En el mismo sentido, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas establece:

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;

II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;

III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

Aunado a lo anterior, es de destacarse que los puntos Séptimo y Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establecen el momento en que se deberá llevar a cabo la clasificación de la información; así como el alcance del fundamento y la motivación que debe de observar la clasificación de la información:

"Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.

Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.

Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva."

También resulta significativo considerar lo que los **Lineamientos** antes mencionados, aplicables en la materia, prevé en el punto Trigésimo segundo, mismo que a la letra se transcribe:

Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General.

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter.

Nota: Lo resaltado es propio.

De los numerales antes trascritos es de interpretarse que para la clasificación de la Información el área correspondiente deberá remitir al Comité de Transparencia un escrito en el que funde y motive la clasificación y este a su vez podrá adoptar, en sesiones y por mayoría de votos, la confirmación, modificación o revocación de tal determinación debiendo para tal efecto, señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento; además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

En esta tesitura, toda vez que las resoluciones emitidas por el Comité de Transparencia guardan la formalidad de ser analizadas y votadas en sesiones, ello presupone necesariamente la elaboración de Actas de dicho Comité donde se contengan tales determinaciones y su aprobación en su caso, y ser notificadas al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud.

En este orden de ideas, es de señalarse que los sujetos obligados al confirmar la reserva de la clasificación requerida por el solicitante deben tomar en consideración para cada caso específico los elementos que las leyes y lineamientos precisan, pues solo de tal manera es posible dar certeza jurídica a los peticionarios respecto a la actualización, o no, de una causal de reserva o confidencialidad de la información.

Por lo que es de razonarse de este artículo, que bien pudiera darse el caso de que el Comité de Transparencia, no solo no confirme tal determinación de clasificar la información, sino que además **la modifique o revoque**.

En virtud de lo anterior, en la respuesta que en esencia se le otorgó a la parte hoy recurrente, no se expresó un solo razonamiento jurídico ni se relacionó debidamente las disposiciones legales para la clasificación de la información en reservada o confidencial acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en los ordenamientos antes citados, pues en ningún caso, los Sujetos Obligados podrán contravenirlas, excepciones que deberán aplicarse de manera restrictiva y limitada.

Ahora bien, el Sujeto Obligado en su respuesta a la solicitud de información mencionó que "El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, clasificó la información como reservada, en razón que se hace de conocimiento que en términos del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y del 10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, las Sesiones del Consejo de la Judicatura son privadas y en vía de consecuencia, también lo son sus actas, por lo que el otorgamiento de la información planteada implicaría trastocar el régimen de facultades legales de este Cuerpo Colegiado, a fin de otorgar documentos que, como se vio por su propia y especial naturaleza se Página 21 de 26

encuentra imposibilitado legalmente para proceder en los términos planteados por el solicitante, en efecto en términos del supuesto previsto en los artículos 113 fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual refiere que como información reservada podrá clasificarse la que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales y 134 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo...*, sin embargo, no hay constancia alguna en el expediente en que se resuelve, de que el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado hubiere emitido resolución en la cual confirmó la clasificación de la información, ni que dicha resolución haya sido notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud, en apego a las disposiciones legales previstas en la Ley de la materia, así como en los Lineamientos Generales, anteriormente citados.

En tal contexto, este Órgano Colegiado determina que el Sujeto Obligado recurrido, en su respuesta a la solicitud de información con número de folio del sistema electrónico INFOMEX no estableció debidamente el procedimiento de clasificación respecto a la información peticionada pues no señaló las razones y circunstancias por las que dicha información requerida se vincula con las hipótesis normativas a que hace alusión, esto es, no expresó los motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, además de no haber aplicado la prueba de daño, ni haber determinado las circunstancias que justifican el establecimiento de un plazo de reserva, en cumplimiento a lo previsto en los ordenamientos de la materia, pues en esto último, la parte recurrida fue omisa al no establecer periodicidad alguna.

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado dejo de atender lo previsto en el artículo 135 de la Ley en la materia local, el cual se detalla a continuación:

Artículo 135. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.

Así, la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular. Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado pudiese aportar (en el caso que nos ocupa no ofreció medio de convicción alguno), sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe, el cual no aconteció, pues el Sujeto Obligado recurrido a fin de clasificar la información como reservada únicamente se limitó a invocar el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el artículo 10 del Reglamento del Consejo de la Judicatura.

Resulta fundamental para el Pleno de este Instituto tomar en cuenta lo expresado por el Sujeto Obligado, tanto en su escrito de respuesta a la solicitud de información como en su escrito de contestación al presente recurso en cuanto a que "...las sesiones del Consejo de la Judicatura son privadas y en consecuencia, también lo son sus actas por lo que otorgar copias de las mismas implicaría vulnerar un precepto legal que atiende al régimen de facultades del cuerpo colegiado que integra el Consejo de la Judicatura...", y en ese contexto, este órgano garante del ejercicio del derecho de acceso a la información considera que tal argumento carece de todo razonamiento jurídico y sustento legal, pues el Sujeto Obligado Poder Judicial del Estado, parte de la percepción de que todos los asuntos tratados en las sesiones privadas son

Página 22 de 26

de contenidos reservados, por sí mismos, siendo que el carácter privado de una sesión obedece a las personas determinadas que pueden participar en ellas, en atención a las circunstancias particulares y de interés de los asuntos a tratar en las mismas, ya que como principio fundamental del derecho humano de acceso a la información, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, y sólo podrá ser clasificada excepcional y temporalmente como reservada por razones de interés público en los términos dispuestos por la Ley de la materia.

Y es que dichos preceptos legales aludidos por el Sujeto Obligado de ninguna forma prevén de manera expresa que es reservada la información solicitada, materia del presente medio de impugnación.

Se agrega además la consideración de que la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de Quintana Roo, y demás ordenamientos aplicables en la materia no contemplan ni regulan sesiones secretas en atención al principio de máxima publicidad que debe prevalecer en la interpretación y aplicación del derecho de acceso a la información.

Por otra parte, el Pleno de este Instituto considera oportuno hacer referencia a lo previsto en el artículo 96, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo que, de manera esencial, establece lo siguiente:

"Artículo 96. Además de lo señalado en el artículo 91 de la presente Ley, el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;

Aunado a lo anterior, es importante precisarle al Sujeto Obligado lo establecido en el artículo 3, fracción IX, de la ley de la materia, el cual describe lo siguiente:

Artículo 3. Para la mejor comprensión e interpretación de este ordenamiento se establecen las siguientes definiciones:

IX. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

Por tanto, resulta indudable para esta Autoridad que, en lo concerniente a la solicitud de información y en específico al rubro de información marcado con el inciso b, consistente en: Actas del Consejo de la Judicatura generadas durante el mismo periodo, solicitándole que anexe la documentación que sustente lo anterior, materia del presente asunto, resulta ser información pública a la que el Sujeto Obligado debe dar acceso.

Se agrega que, permitir el acceso a esta información solicitada es dar cumplimiento a los fines contemplados por la Ley de la materia, que establece que los sujetos obligados deberán observar los principios de transparencia y publicidad de sus actos y respetar el derecho al libre acceso a la información pública.



Bajo este tenor, este órgano colegiado considera oportuno hacer referencia de lo que los ordenamientos aplicables en la materia establecen acerca de la **elaboración de las versiones públicas** y en tal virtud el artículo 3 fracción XXVI de la ley de la materia define como versión pública aquel documento o expediente al que se le elimina u omite las partes o secciones clasificadas:

Artículo 3. Para la mejor comprensión e interpretación de este ordenamiento se establecen las siguientes definiciones:

XXVI. Versión Pública: Documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas, y

En el mismo sentido, el mismo artículo 3, fracciones IX y X de la Ley en cita define el significado de "documento" así como de "expediente", de la siguiente manera:

IX. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

X. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;

Asimismo, es importante puntualizar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo prevé en sus artículos 129 y 130 que cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una **versión pública** en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. Asimismo, que la información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas.

En esta dirección, también resulta necesario hacer el señalamiento por parte del Pleno de este Instituto, que el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley de la materia establece que la elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

"Artículo 156. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. (...)"

De igual manera el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, regula la elaboración de **versiones públicas** de los documentos o expedientes que contengan partes o secciones reservadas o confidenciales, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y que deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.





Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.

Es en atención a lo anteriormente razonado y fundado y a que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Rood disponen que en la interpretación y aplicación del derecho de acceso a la información deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, que resulta procedente MODIFICAR la respuesta de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, y ORDENAR al mismo haga entrega al hoy recurrente de la información solicitada, con número de folio al en específico, lo relacionado con el rubro de información marcado con el inciso b, es decir, "actas del Consejo de la Judicatura generadas durante el mismo periodo, solicitándole que anexe la documentación que sustente lo anterior", observando lo que para tal efecto dispone la Ley y demás ordenamientos aplicables en la materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Acceso a Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo:

RESUELVE

CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el 91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que haya causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspondiente y publíquese;





UINTO. - Notifíquese a las partes la presente Resolución vía el sistema electrónico INFOMEXQROO y adicionalmente publíquese a través de lista y en estrados y CÚMPLASE.

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS DEL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO, LICENCIADO JOSÉ QRLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ, COMISIONADO PRESIDENTE, M.E. CINTIA YRAZU DE LA TORRE VILLANUEVA, COMISIONADA, ANTE LA SECRETARIA EJECUTIVA, LICENCIADA ALDA LIGIA CASTRO BASTO QUIEN AUTORIZA Y DA FEL DOY FE.

PLENO

PL